

2022 JUL -1 PM 7: 48

**OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA**

**ASUNTO: SE PRESENTA DEMANDA
DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD**

ACTOR: MOVIMIENTO CIUDADANO

**AUTORIDADES RESPONSABLES:
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

**MINISTROS Y MINISTRAS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
PRESENTE**

Ciudad de México, México 1 de julio de 2022.

Las y los suscritos, CC. DANTE ALFONSO DELGADO RANNAURO, BENJAMÍN ALAMILLO GONZÁLEZ, ANA LUCIA BADUY VALLES, RUBEN ISAAC BARRIOS OCHOA, JACOBO DAVID CHEJA ALFARO, PRISCILLA FRANCO BARBA, MARTHA PATRICIA HERRERA GONZÁLEZ, TABITA ORTÍZ HERNÁNDEZ, LUCÍA ALEJANDRA PUENTE GARCÍA y JUAN IGNACIO ZAVALA GUTIÉRREZ, Coordinador, Integrantes y Secretario General de Acuerdos, respectivamente, de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, cuya personalidad se acredita con las certificaciones expedidas por el Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, licenciada DANIELA CASAR GARCÍA, de fechas catorce de febrero de dos mil veintidós, y quince de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, que se acompañan para los efectos legales consiguientes; por este ocurso y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

relación con el artículo 20 numeral 2, inciso o) de los Estatutos de Movimiento Ciudadano; comparecemos para presentar en tiempo y forma la presente ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Con fundamento en los artículos: 104, fracción VI y 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 29, 39, 22, 59, 61 y 62 tercer párrafo, de la citada Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 fracción 1 y 10 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en contra de la expedición, promulgación y publicación del Decreto por el que se reforman los artículos 33; 36; el primer párrafo y la fracción IV del artículo 37; la fracción XI del artículo 50; las fracciones I, IV y V así como el último párrafo del artículo 59; el primer párrafo del Art. 60; el artículo 61; la fracción IV del artículo 63; el artículo 64; la fracción IV del artículo 67; la fracción V del artículo 80; los incisos N) y Ñ) de la fracción II, así como la fracción XVII del artículo 83; primer y último párrafo del artículo 94; primer párrafo, las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 95; el artículo 103; el artículo 107; las fracciones I, II, IV, VII, VIII y IX del artículo 109; tercer párrafo del artículo 121; la fracción III del artículo 124; la fracción II del artículo 162; la fracción VI del Artículo 251; el artículo 265; la fracción V del artículo 273; el primer párrafo y la fracción V del artículo 323; el primer párrafo del artículo 348; el artículo 350; 351; primer párrafo, fracción I y último párrafo del artículo 352; primer y último párrafo del artículo 353; fracción III del artículo 383; el artículo 406; y primer párrafo del artículo 408. Se adiciona la fracción X Bis, un Párrafo y los incisos A), B), C), D), E) y F) al artículo 60; se adiciona el artículo 60 Bis, los incisos A), B), C), D), E), F), G), H), I) y J) a la fracción XII del artículo 63; la fracción IV Bis al artículo 67; los incisos O), P) y Q) a la fracción II del artículo 83; las fracciones XIX Bis, XIX Ter y XIX Quáter al artículo 86; las Fracciones XXIV Bis, XXIV Ter y XXIV Quáter al artículo 88; las fracciones XXII Bis, XXII Ter, XXII Quáter, XXII Quinquies y XXII

Sexies al artículo 94; las fracciones XV Bis con los incisos A) y B), XV Ter, XV Quáter, XV Quinquies, XV Sexies, XV Septies, XV Octies y XV Nonies del artículo 95; se agregan los incisos A) y B) del artículo 103. Se deroga el inciso C) de la fracción XI del artículo 50; las fracciones VII y IX del artículo 59; se derogan las fracciones III y X del Artículo 60; el Artículo 65; el Artículo 68; el inciso N) de la Fracción II del artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción XVII del artículo 86; las fracciones III, V y VI, así como el último párrafo del artículo 98; la fracción II y dos párrafos del artículo 102, los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 107; el artículo 108; el artículo 109. todos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, por considerar que resulta contraria a la Ley Fundamental y por consiguiente inválida.

De conformidad con el artículo 5º de la invocada Ley Reglamentaria y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de la misma ley, señalamos como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el inmueble marcado con el número [REDACTED]

[REDACTED] así mismo, designamos como Delegados para que indistintamente formulen promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas, presenten alegatos y promuevan incidentes, a los [REDACTED]

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10 fracciones III y IV, 22, y 61, de la Ley Reglamentaria en comento, además de lo ya

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

expresado, manifestamos lo siguiente:

I. NOMBRE DEL ACTOR: MOVIMIENTO CIUDADANO, representado por los CC. DANTE ALFONSO DELGADO RANNAURO, BENJAMÍN ALAMILLO GONZÁLEZ, ANA LUCIA BADUY VALLES, RUBEN ISAAC BARRIOS OCHOA, JACOBO DAVID CHEJA ALFARO, PRISCILLA FRANCO BARBA, MARTHA PATRICIA HERRERA GONZÁLEZ, TABITA ORTÍZ HERNÁNDEZ, LUCÍA ALEJANDRA PUENTE GARCÍA y JUAN IGNACIO ZAVALA GUTIÉRREZ, con el carácter de Coordinador, Integrantes y Secretario General de Acuerdos, respectivamente, de la COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL.

II. ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y EJECUTIVO QUE INTERVINIERON EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES IMPUGNADAS:

a) ÓRGANO LEGISLATIVO Y AUTORIDAD EMISORA: El H. Congreso de la Ciudad de México

b) ÓRGANO EJECUTIVO Y AUTORIDADES PROMULGADORAS: La C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

III. NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA Y EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERE PUBLICADO: Decreto por el que se reforman los artículos 33; 36; el primer párrafo y la fracción IV del artículo 37; la fracción XI del artículo 50; las fracciones I, IV y V así como el último párrafo del artículo 59; el primer párrafo del Art. 60; el artículo 61; la fracción IV del artículo 63; el artículo 64; la fracción IV del artículo 67; la fracción V del artículo 80; los incisos N) y Ñ) de la fracción II, así como la fracción XVII del artículo 83; primer y último párrafo del artículo 94; primer párrafo, las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 95; el artículo 103; el artículo 107; las fracciones I, II, IV, VII, VIII y IX del

artículo 109; tercer párrafo del artículo 121; la fracción III del artículo 124; la fracción II del artículo 162; la fracción VI del Artículo 251; el artículo 265; la fracción V del artículo 273; el primer párrafo y la fracción V del artículo 323; el primer párrafo del artículo 348; el artículo 350; 351; primer párrafo, fracción I y último párrafo del artículo 352; primer y último párrafo del artículo 353; fracción III del artículo 383; el artículo 406; y primer párrafo del artículo 408. Se adiciona la fracción X Bis, un Párrafo y los incisos A), B), C), D), E) y F) al artículo 60; se adiciona el artículo 60 Bis, los incisos A), B), C), D), E), F), G), H), I) y J) a la fracción XII del artículo 63; la fracción IV Bis al artículo 67; los incisos O), P) y Q) a la fracción II del artículo 83; las fracciones XIX Bis, XIX Ter y XIX Quáter al artículo 86; las Fracciones XXIV Bis, XXIV Ter y XXIV Quáter al artículo 88; las fracciones XXII Bis, XXII Ter, XXII Quáter, XXII Quinquies y XXII Sexies al artículo 94; las fracciones XV Bis con los incisos A) y B), XV Ter, XV Quáter, XV Quinquies, XV Sexies, XV Septies, XV Octies y XV Nonies del artículo 95; se agregan los incisos A) y B) del artículo 103. Se deroga el inciso C) de la fracción XI del artículo 50; las fracciones VII y IX del artículo 59; se derogan las fracciones III y X del Artículo 60; el Artículo 65; el Artículo 68; el inciso N) de la Fracción II del artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción XVII del artículo 86; las fracciones III, V y VI, así como el último párrafo del artículo 98; la fracción II y dos párrafos del artículo 102, los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 107; el artículo 108; el artículo 109. todos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado el 2 de junio de 2022, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

IV. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS: Artículos 1o., 4o., 14, 16, 17, 35, 41, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

ÚNICO. EXISTE CONTACTO PLENO CON LA MATERIA ELECTORAL. En la presente demanda se aducen violaciones a la autonomía del Organismo Público Local Electoral de la Ciudad de México, lo que a ubica dentro de los supuestos del artículo 105, fracción II, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad. También resulta aplicable la tesis P./J. 25/99, la cual establece que la materia electoral puede encontrarse en legislación ajena a la que regula los procesos electorales; esto se reitera por la tesis P./J. 1/2011, en la que se permite la judiciabilidad de una Constitución local. A saber:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se instituyó este tipo de vía constitucional en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibió su procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusión el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se admitió la procedencia de la acción en contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta última reforma, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de dicha Constitución prevé reglas genéricas para la sustanciación del procedimiento de la acción de inconstitucionalidad y reglas específicas cuando se impugnan leyes electorales. De una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los artículos 105, fracción II, y 116, fracción IV, en relación con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II, y 122, tercer párrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constitución, se llega al convencimiento de que **las normas generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que,**

aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistribución, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por razón de su contenido o de la materia específica que regulan, no se justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y las específicas para otras.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, QUE ESTABLECE REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO, CONSTITUYE UNA LEY ELECTORAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE ESE MEDIO DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse respecto de las características de las normas de naturaleza electoral que pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad, sostuvo que no son sólo las contenidas en leyes o códigos electorales sustantivos, sino también las vinculadas directa o indirectamente con los procesos electorales. En ese sentido, **se concluye que el artículo 80, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que establece requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Gobernador del Estado, es de naturaleza electoral, en tanto modula el ejercicio del derecho político-electoral a ser votado, si se toma en cuenta que, en términos de la Ley Electoral de Quintana Roo, no podrá registrarse**

a una persona como candidato al referido cargo si no cumple con todos los requisitos del precepto indicado, situación que no puede ubicarse al margen del ámbito electoral y de los procesos electorales, para efecto de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, máxime que el registro de un candidato constituye, por sí mismo, un acto inmerso en los procesos electorales, siendo la autoridad electoral la encargada de negarlo u otorgarlo.

Esto se refuerza con el hecho de que los partidos políticos, por virtud del artículo 41 constitucional somos entidades de interés público que tenemos como garantía institucional el promover la participación en la vida democrática e integrar la representación política. Sin embargo, también tenemos como deber el respetar la equidad de la contienda, y sobre todo, a los institutos electorales que la garantizan. Esto significa que también es nuestro deber impugnar los cambios legislativos que consideramos les perjudican y por ello, consideramos procedente la presente acción de inconstitucionalidad.

Lo anterior se sustenta en los antecedentes y conceptos de invalidez, siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 29 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-344/2021, sus proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, por un monto de \$1,955,020,834.00.
2. El 1 y 2 de noviembre de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de México envió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México su Programa Operativo Anual y el proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2022, para que

se incluyera en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022.

3. El 30 de noviembre de 2021, la Jefa de Gobierno presentó ante el Congreso de la Ciudad de México el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para Ejercicio Fiscal 2022, en el que le señaló al Congreso de la Ciudad de México como propuesta de presupuesto de egresos del Instituto Electoral la cantidad de \$1,201,084,647.00, y se incluyó la propuesta original de la parte actora por la cantidad de \$1,955,020,834.00.
4. El 27 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos 2022, en el que el Congreso de la Ciudad de México asignó al Instituto Electoral de la Ciudad de México como Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, la cantidad de \$1,201,084,647.
5. El día 17 de febrero de 2022, en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, el diputado del Grupo Parlamentario Morena Carlos Hernández Mirón, presentó una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

En esta misma fecha fue turnada a la Comisión de Asuntos Político Electorales para su estudio y análisis (artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México).

6. El viernes 27 de mayo de 2022, fue aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 33; 36; el primer párrafo y la fracción IV del artículo 37; la fracción XI del artículo 50; las fracciones I, IV y V así como el último párrafo del artículo 59; el primer párrafo del Art. 60; el artículo 61; la fracción IV del

artículo 63; el artículo 64; la fracción IV del artículo 67; la fracción V del artículo 80; los incisos N) y Ñ) de la fracción II, así como la fracción XVII del artículo 83; primer y último párrafo del artículo 94; primer párrafo, las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 95; el artículo 103; el artículo 107; las fracciones I, II, IV, VII, VIII y IX del artículo 109; tercer párrafo del artículo 121; la fracción III del artículo 124; la fracción II del artículo 162; la fracción VI del Artículo 251; el artículo 265; la fracción V del artículo 273; el primer párrafo y la fracción V del artículo 323; el primer párrafo del artículo 348; el artículo 350; 351; primer párrafo, fracción I y último párrafo del artículo 352; primer y último párrafo del artículo 353; fracción III del artículo 383; el artículo 406; y primer párrafo del artículo 408. Se adiciona la fracción X Bis, un Párrafo y los incisos A), B), C), D), E) y F) al artículo 60; se adiciona el artículo 60 Bis, los incisos A), B), C), D), E), F), G), H), I) y J) a la fracción XII del artículo 63; la fracción IV Bis al artículo 67; los incisos O), P) y Q) a la fracción II del artículo 83; las fracciones XIX Bis, XIX Ter y XIX Quáter al artículo 86; las Fracciones XXIV Bis, XXIV Ter y XXIV Quáter al artículo 88; las fracciones XXII Bis, XXII Ter, XXII Quáter, XXII Quinquies y XXII Sexies al artículo 94; las fracciones XV Bis con los incisos A) y B), XV Ter, XV Quáter, XV Quinquies, XV Sexies, XV Septies, XV Octies y XV Nonies del artículo 95; se agregan los incisos A) y B) del artículo 103. Se deroga el inciso C) de la fracción XI del artículo 50; las fracciones VII y IX del artículo 59; se derogan las fracciones III y X del Artículo 60; el Artículo 65; el Artículo 68; el inciso N) de la Fracción II del artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción XVII del artículo 86; las fracciones III, V y VI, así como el último párrafo del artículo 98; la fracción II y dos párrafos del artículo 102, los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 107; el artículo 108; el artículo 109. todos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

7. El 2 de junio de 2022, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman los artículos 33; 36; el primer párrafo y la fracción IV del artículo 37; la fracción XI del artículo 50; las fracciones I, IV y V así como el último párrafo del artículo 59; el primer párrafo del Art. 60; el artículo 61; la fracción IV del artículo 63; el artículo 64; la fracción IV del artículo 67; la fracción V del artículo 80; los incisos N) y Ñ) de la fracción II, así como la fracción XVII del artículo 83; primer y último párrafo del artículo 94; primer párrafo, las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 95; el artículo 103; el artículo 107; las fracciones I, II, IV, VII, VIII y IX del artículo 109; tercer párrafo del artículo 121; la fracción III del artículo 124; la fracción II del artículo 162; la fracción VI del Artículo 251; el artículo 265; la fracción V del artículo 273; el primer párrafo y la fracción V del artículo 323; el primer párrafo del artículo 348; el artículo 350; 351; primer párrafo, fracción I y último párrafo del artículo 352; primer y último párrafo del artículo 353; fracción III del artículo 383; el artículo 406; y primer párrafo del artículo 408. Se adiciona la fracción X Bis, un Párrafo y los incisos A), B), C), D), E) y F) al artículo 60; se adiciona el artículo 60 Bis, los incisos A), B), C), D), E), F), G), H), I) y J) a la fracción XII del artículo 63; la fracción IV Bis al artículo 67; los incisos O), P) y Q) a la fracción II del artículo 83; las fracciones XIX Bis, XIX Ter y XIX Quáter al artículo 86; las Fracciones XXIV Bis, XXIV Ter y XXIV Quáter al artículo 88; las fracciones XXII Bis, XXII Ter, XXII Quáter, XXII Quinquies y XXII Sexies al artículo 94; las fracciones XV Bis con los incisos A) y B), XV Ter, XV Quáter, XV Quinquies, XV Sexies, XV Septies, XV Octies y XV Nonies del artículo 95; se agregan los incisos A) y B) del artículo 103. Se deroga el inciso C) de la fracción XI del artículo 50; las fracciones VII y IX del artículo 59; se derogan las fracciones III y X del Artículo 60; el Artículo 65; el Artículo 68; el inciso N) de la

Fracción II del artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción XVII del artículo 86; las fracciones III, V y VI, así como el último párrafo del artículo 98; la fracción II y dos párrafos del artículo 102, los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 107; el artículo 108; el artículo 109. todos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

CONCEPTOS DE INVALIDEZ:

PRIMERO. VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA POR NO SEGUIRSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. El principio de seguridad jurídica es una protección que tienen todas las personas que se encuentran dentro del Estado Mexicano contra los actos que pueda realizar su gobierno de forma arbitraria y que pueda lesionar la dignidad y todo lo que ella dimana. Este se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

(...)”

Esto se desarrolló jurisprudencialmente en la tesis 2a./J. 144/2006, que al efecto establece lo siguiente:

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que **debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades**, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenore un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.

Para evitar la arbitrariedad, las autoridades deben entonces actuar de una forma acotada y confiable; una de las expresiones de dicho comportamiento son las formalidades esenciales del procedimiento, que jurisprudencialmente se hallan en la tesis P./J. 47/95:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". **Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación** y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la

indefensión del afectado.

En materia legislativa, para garantizar que las leyes que rigen a todos los mexicanos no sean arbitrarias, se deben seguir lo que jurisprudencialmente se ha definido como a las formalidades esenciales del procedimiento parlamentario, la cual se ha desarrollado en el ámbito judicial en las tesis plenarios P. L/2008 y P./J. 11/2011:

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares: 1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, pues se busca determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Así, estos criterios no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones llevadas a cabo

en el desarrollo del procedimiento legislativo, pues su función es ayudar a determinar la relevancia última de cada actuación a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como por ejemplo, la entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. En este contexto, la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades de cada caso concreto, sin que ello pueda desembocar en su final desatención.

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CUANDO EXISTAN INCONSISTENCIAS DURANTE LA VOTACIÓN, EL ÓRGANO PARLAMENTARIO DEBE TOMAR LAS MEDIDAS MÍNIMAS NECESARIAS PARA SOLVENTARLAS, DEJANDO CONSTANCIA Y DOCUMENTANDO LA SECUENCIA DE LOS HECHOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en un Estado democrático, la Constitución impone requisitos de publicidad y participación para la creación, reforma, modificación o supresión de las normas, sin los cuales éstas no pueden considerarse válidas, de modo que para lograr el respeto a los principios de democracia y representatividad contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo reviste importancia el contenido de las leyes sino, además, cómo se crean o reforman, en virtud de que las **formalidades esenciales del procedimiento legislativo aseguran el cumplimiento de los principios democráticos.** Así, cuando existen inconsistencias durante la votación, para dar certeza al procedimiento legislativo, a pesar de la falta de norma expresa, el órgano parlamentario debe tomar las medidas mínimas necesarias para solventarlas, dejando constancia y documentando puntualmente la secuencia de los hechos, pues de no hacerlo se actualiza una irregularidad

trascendental, al soslayar los requisitos de publicidad y participación para la creación, reforma, modificación o supresión de las normas, sin los cuales no pueden ser válidas, en demérito del respeto a los principios democráticos consagrados por la propia Ley Suprema.

Las formalidades esenciales del procedimiento legislativo son aquellos actos concretos que debe cumplir la autoridad para garantizar que haya una deliberación democrática y las reglas que se produzcan no sean producto de un actuar autoritario.

En el caso que nos ocupa, no se siguieron las formalidades esenciales del proceso legislativo, en atención a lo que habremos de expresar en los siguientes argumentos:

a) POR DESAHOGO IRREGULAR EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. En primer lugar, es necesario señalar que la iniciativa presentada el día 17 de febrero de 2022, en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, por el diputado del Grupo Parlamentario Morena Carlos Hernández Mirón, por el que se proponía reformar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, fue turnada a la Comisión de Asuntos Político-Electorales para su estudio y análisis.

El día 7 de abril de 2022, la Comisión de Asuntos Político-Electorales solicitó una prórroga para un estudio y análisis más profundo de la iniciativa de mérito, ésta fue concedida por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

Posteriormente, el 6 de mayo de 2022, se llevó a cabo una reunión de asesores de la Comisión de Asuntos Político-Electorales para realizar un análisis técnico del proyecto de dictamen elaborado respecto de la

iniciativa presentada. En dicha reunión, se realizaron observaciones al proyecto de dictamen, aludiendo a la necesidad de que se realizará una mesa de trabajo con Consejeras y Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Así, y atendiendo a la necesidad de realización de dicha mesa de trabajo, el día 9 de mayo de 2022, la Consejera Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Mtra. Patricia Avendaño Durán, solicitó una mesa de trabajo con las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Político – Electorales, con el fin de precisar diversas consideraciones respecto de la iniciativa de ley mencionada.

En este entendido, el día 13 de mayo de 2022, derivado de una convocatoria de la presidencia de la Comisión dictaminadora, se realizó la mesa de trabajo entre las y los integrantes de la Comisión de Asuntos Político-Electorales y Consejeras y Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México; en esta misma fecha el diputado promovente, presentó una modificación a su iniciativa, por la cual el ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO, a fin de cambiar el plazo de 60 días a 90 días para que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México pudiera adecuar su estructura orgánica y funcional.

Asimismo, en diversas fechas se convocó a reuniones extraordinarias, incumpliendo de manera flagrante con el plan de trabajo de la Comisión previamente aprobado. Dichas convocatorias se realizaron fuera de los momentos procesales señalados por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en específico en el artículo 193. Las reuniones de la comisión previamente programadas eran pospuestas por supuestas de manera arbitraria bajo el argumento de “causas de fuerza mayor” sin que se explicaran con claridad éstas.

Posteriormente, en fecha 20 de mayo de 2022, se convocó a los

integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos-Electorales, mediante convocatoria que no cumplió con lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en sus artículos 193, 211 fracción V, 238, 239, 240, 241 y 276 relativos a los plazos para efectuar la convocatoria a reuniones ordinarias, extraordinarias, urgentes o permanentes de las comisiones legislativas del Congreso Local. Ello pues la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos-Electorales celebrada el 20 de mayo de 2022, por la naturaleza del tema tratado, no abordó un dictamen de carácter urgente.

Lo anterior quedó de manifiesto en el oficio de fecha de 25 de mayo de 2022 del diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Secretario de la Comisión dictaminadora, en donde señala lo siguiente:

"1. Es necesario advertir que conforme a lo estipulado en los artículos 238,239 y 240 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las comisiones pueden tener reuniones con carácter ordinario, extraordinario, urgente o permanente; son reuniones ordinarias, las programadas previamente conforme al calendario básico anual de cada comisión; y son reuniones extraordinarias las que se realizan fuera de las programadas previamente, conforme al calendario básico anual de cada comisión.

*En este sentido, el que suscribe no encontró en el presente dictamen, justificación alguna para que esta comisión dictaminadora celebrara una Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político – Electorales, pues si bien es cierto que se celebró en fecha distinta a las establecidas en el **PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO – ELECTORALES PRIMER AÑO LEGISLATIVO**, también es cierto que esta comisión dictaminadora ha incumplido en todas las ocasiones posibles en que ha dictaminado, pues no ha habido ni una sola sesión de esta comisión, que se haya celebrado conforme al calendario relacionado en el mencionado Programa Anual de Trabajo; y no por esa razón, la presidencia de esta comisión motivó y fundamentó dichas sesiones, como sesiones extraordinarias.*

En suma, es claro entonces que, aunque esta comisión hubiera querido justificar la

celebración de una Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político – Electorales, conforme a lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, una de dos: o no conocen lo dispuesto por los artículos 238, 239 y 240 del citado ordenamiento legal (lo cual no los exime de su cumplimiento), o simple y sencillamente no quisieron cumplir con lo mandato por nuestro reglamento.

2. De la misma manera, el artículo 276 del mismo Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, indica que las iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y demás asuntos turnados deben distribuirse a las y los Diputados integrantes, por lo menos, con cuarenta y ocho horas de anticipación a la reunión de trabajo en la que se someterá a su discusión, salvo dispensa de dicho trámite por la mayoría de las y los Diputados, en caso de urgencia o reunión extraordinaria.

No obstante esta sesión de la comisión fue de carácter extraordinaria, el presente proceso de dictaminación careció de la dispensa del trámite a que se refiere este artículo 276 del Reglamento del Congreso, pues no se consultó a las y los Diputados integrantes de la comisión dictaminadora, ni antes ni después de la realización de la sesión extraordinaria, de querer realizar dicha dispensa, ni tampoco se nos notificó en ningún momento de que hubiera existido tal dispensa.

[...]

Diputado presidente, habiendo expresado con precisión los presentes razonamientos, y toda vez que la presidencia a su cargo ha tenido a bien cuidar cualquier vicio legal de otros asuntos, como el dictamen relativo a la prohibición de las corridas de toros:

SOLICITO

SEA RETIRADO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 26 DE MAYO DE 2022, EL NUMERAL 34 DEL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONCERNIENTE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE SUBSANAR LOS VICIOS LEGALES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE PRESENTA DICHO DICTAMEN, ASÍ COMO CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE

**PARLAMENTO ABIERTO, ESTIPULADO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE
DE NUESTRO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO."**

Posteriormente, el día 26 de mayo del presente año, en sesión ordinaria, el pleno del Congreso de la Ciudad de México, le dio trámite al punto 34 del orden del día con las violaciones que se describen al tenor de lo siguiente:

La Vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales la Diputada Maxta Irais González Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el Secretario de la Comisión, el Diputado Ricardo Rubio Torres del Partido Acción Nacional, ambos integrantes a la Junta Directiva de la Comisión Dictaminadora¹, presentaron un oficio ante la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el cual se solicita el retiro del dictamen aludido, en función de la violación al artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Dicho artículo se transcribe para su pronta referencia:

Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica los siguientes asuntos:

...

Las Comisiones podrán retirar el dictamen enviado a la Coordinación de Servicios Parlamentarios mismos que a su vez enviarán de manera inmediata

¹ Artículo 190. La Junta Directiva de la Comisión se integrará por una o un Presidente, una o un Vicepresidente y una o un Secretario, de conformidad con el presente reglamento. Además de la Junta Directiva y de las y los integrantes, las Comisiones contarán con la asistencia de una o un Secretario Técnico, cuya función se regula en el Título Sexto, Capítulo Primero, Sección Novena del presente Reglamento. Para convocar a la Reunión de instalación, las y los Diputados que integran la Junta Directiva de la Comisión o Comité, deberán acordar la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo. La o el Presidente de la Junta Directiva deberá emitir la convocatoria respectiva. Si la o el Presidente no convocara, en el plazo establecido, se podrá emitir con la firma de la o el Secretario de la Junta Directiva.

una copia a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Presidencia de la Junta, hasta antes de que se discuta por el Pleno. Para ello, su Junta Directiva deberá acordarlo. La Comisión que retire un dictamen tendrá hasta dos sesiones para volver a presentar.

En este orden de ideas, resulta evidente también se violentó lo establecido en el párrafo tercero del artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México el cual señala a la letra lo siguiente:

"Artículo 192. (...)

(...)

Los acuerdos de las Comisiones serán suscritos por la mayoría de las y los integrantes presentes en la sesión, en tanto que los acuerdos de la Junta Directiva serán suscritos por la mayoría."

De un análisis sistemático de los artículos anteriormente referidos, se desprende que las y los Diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión encargada de dictaminar las reformas hechas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se encuentra facultados para solicitar el retiro del dictamen aludido. **Esto pues, como se ha señalado en la presente relatoría, el escrito por medio del cual se solicita el retiro del dictamen del orden del día nace de un acuerdo² de la mayoría de la Junta Directiva de la Comisión Dictaminadora, tal y como se señala en el artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.** Cabe apuntar que en sesiones previas del Congreso local, se ha hecho valer lo establecido en el mismo artículo del Reglamento, siendo la propia Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México quien ha invocado con antelación del precepto legal para la aplicación del debido

² Cecilia Mora, señala que un acuerdo parlamentario en el Poder Legislativo Mexicano, mayormente se aplica por encima de las leyes orgánicas y reglamentos, la autora hace referencia a que los acuerdos parlamentarios matan prácticamente cualquier ordenamiento jurídico que se deje morir; "Ponencias Foro Reglamento de Debates las Cámaras del H. Congreso de la Unión " pag. 196. El autor Elviro Aranda señala que el acuerdo parlamentario es una de 4 fuentes del derecho parlamentarios. Conceptos Básicos del Derecho Parlamentario pag. 41

procedimiento, y con ello reparar cualquier vicio durante el procedimiento legislativo, para su retiro y reencauce de los instrumentos legislativos, como a continuación se muestra³:

“Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México devuelve a comisiones iniciativa de Ley en materia de corridas de toros.

Esta tarde se llevó a cabo una sesión de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México donde se acordó, por mayoría de votos, devolver a la Comisión de Protección a los Animales el dictamen con modificación de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los animales de la Ciudad de México, en materia de ‘corridos de toros’ presentada por diputadas y diputados integrantes de distintas asociaciones y grupos parlamentarios de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Con ello, el dictamen fue remitido a la comisión de origen, a fin de que se reponga el procedimiento y se dé cabal cumplimiento a los requisitos de formulación y presentación, tal como lo indica el artículo 80 del reglamento. Esto, luego de que el dictamen fuera sometido a consideración de la Mesa Directiva por diversas inconsistencias técnico-jurídicas.

El Presidente de la Mesa Directiva Héctor Díaz-Polanco aseguró que entre las irregularidades al proceso parlamentario se encontró que “la presentación del dictamen se encuentra fuera de tiempo, ya que el término de 45 días corrió desde el 11 de noviembre de 2021 al 26 de enero de 2022, por esa razón es indebido darle trámite, ya que se viola el artículo 260 del reglamento”.

Por su parte, la secretaria de la Mesa Directiva, diputada Marcela Fuente, aseguró que encuentra coincidencias en la Ley, pero ésta incumple el procedimiento técnico-jurídico ya que “no se realizaron foros de consulta o reuniones con los sectores interesados de la ciudadanía de manera proactiva ni se brindó la publicidad necesaria al asunto, previo a la elaboración del dictamen en cuestión”, como lo indican el Reglamento y la Ley Orgánica del Congreso, en materia del Parlamento Abierto.

³ Consultable en el siguiente vínculo:
<https://congresocdmx.gob.mx/comsoc-mesa-directiva-congreso-ciudad-mexico-devuelve-comisiones-iniciativa-ley-materia-corridas-toros-3278-1.html>

A la sesión se dieron encuentro diputadas y diputados representantes de los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PAN, PRD, PT y de las asociaciones parlamentarias Mujeres Demócratas y Alianza Verde Juntos por la Ciudad, quienes aprobaron con cinco votos a favor y tres en contra la reposición del procedimiento."

En este sentido, el hecho de que se apliquen dos criterios distintos ante una misma hipótesis (uno en el que se retire el dictamen del orden del día por solicitud expresa y por escrito de la mayoría de la Junta Directiva de una Comisión, y otro en el que no se retire un determinado dictamen ante la idéntica petición), violenta de manera clara y flagrante el principio de legalidad y la seguridad jurídica, consagrados en la Carta Magna. Esto pues en algunas ocasiones se aplica lo dispuesto en el artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en otras, de manera arbitraria, no se sigue lo dispuesto en la norma.

Dicho lo anterior, resulta violatorio al procedimiento legislativo las acciones de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México -así como de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos a la garantía de seguridad jurídica-, al continuar con la discusión del dictamen toda vez que dicha petición cumplió las formalidades que establece el reglamento para el retiro de los dictámenes.

En consecuencia, resulta imprescindible señalar que la continuidad que se le dio a la discusión del Dictamen corresponde a mandato de la fracción parlamentaria mayoritaria en el Congreso de la Ciudad y no al acuerdo de voluntades que debe generarse y permear a las y los diputados integrantes del Congreso.

Ahora bien, en atención a los señalamientos vertidos sobre las violaciones al procedimiento realizadas por la presidencia de la Mesa Directiva, es un hecho notorio que incumple a lo establecido en la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México toda vez que el artículo 29 de dicha Ley señala que la Mesa Directiva tiene la atribución de conducir las sesiones del Congreso y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno, al tiempo que garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y en la presente ley y su reglamento.

“Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y en la presente ley y su reglamento.

La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad, y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Acordar el orden de actuación y desempeño de la o el Secretario en las sesiones del Pleno, así como asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno del Congreso;

II. ... VI.

VII. Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación;

VIII. ... X.

XI. Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos que requieren votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, conforme al calendario legislativo establecido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;

XII. Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas con carácter preferente para su discusión y votación, en el caso de que la Comisión o Comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales;

XIII. ... XIV.

XV. Realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión;

XVI. ... XVIII.

XIX. Verificar que las iniciativas, dictámenes, acuerdos, propuestas, mociones y demás escritos que se presenten en la sesión, cumplan con los requisitos de formulación y presentación;

XIX Bis. [...]; y

XX. Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos aplicables y los acuerdos del Congreso.”

Como se desprende, la Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad, así mismo, el mismo artículo señala en el numeral VII señala que la deberá cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación.

Del mismo modo, la obligación de preservar y conducir la sesión en los términos descritos no sólo recae en la Mesa Directiva pues este órgano colegiado también cuenta con la asistencia de la Coordinación de Servicios Parlamentarios la cual tiene por objeto, según el artículo 95 de la Ley Orgánica lo siguiente:

“la coordinación, supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el cumplimiento de las funciones legislativas, administrativas y financieras; constituye el ámbito de coordinación y supervisión de los servicios del Congreso y observa en su actuación las disposiciones de la Constitución Local, de esta ley, el reglamento y los demás ordenamientos, políticas y lineamientos aplicables.

A la Coordinación de Servicios Parlamentarios le corresponde la asistencia a la Mesa

Directiva para el desarrollo de las sesiones del Pleno y a las Comisiones y los Comités.

La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios vela por la imparcialidad de los servicios a su cargo y realiza la compilación y registro de los acuerdos, precedentes y prácticas parlamentarias; para ser designado Coordinador"

De una interpretación del artículo anteriormente mencionado, la Coordinación de Servicios Parlamentarios tiene como objeto asesorar y ayudar a que la Mesa Directiva cumpla a cabalidad con su mandato legal establecido en las Leyes y Códigos establecidos y es visto a todas luces que esas facultades y obligaciones no se cumplieron en dicha sesión por la falta grave al debido procedimientos legislativo, la parcialidad en el actuar de la Mesa Directiva con falta de objetividad y sobre todo que la sesión se mantuvo ilegalmente hasta la aprobación del dictamen que motiva el presente instrumento.

Si bien y es cierto que la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de la Ciudad de México, está facultada y goza de atribuciones para conducir y asegurar el debido desarrollo de las sesiones es un hecho notorio⁴ que en la referida sesión de Congreso de la ciudad, no imperó el orden y la debida conducción de la Mesa Directiva faltando a sus atribuciones y facultades que le fueron conferidas desde una perspectiva legal y

⁴ **HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.** Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.

Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 91/2014, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de presidencia de 24 de marzo de 2014.

sistémica, esto se sostiene con el siguiente link de la plataforma digital YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=nNboJNenKac> , en este contexto la sesión continuó ilegalmente al no tener condiciones de orden, seguridad, imparcialidad y objetividad, aun teniedo de conocimiento que el Congreso cuenta con los instrumentos legales necesarios para sancionar el actuar de los y las Diputadas que violen a lo establecido en el Código de Responsabilidades Parlamentarias, el cual señala el actuar y forma en las y los Diputados se regirán y se conducción en el encargo que les fue conferido.

No obstante, como se ha hecho ver en el presente instrumento, el dictamen que se aprobó no cumplía con los requisitos para su presentación por lo que respecta al procedimiento legislativo y su retiro del orden del día.

Asimismo, la propia Presidencia de la Mesa Directiva realizó una interpretación deficiente de la normatividad parlamentaria y, por tanto, trasgredió lo dispuesto en el artículo 367 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

"Artículo 367. Compete a la Mesa Directiva, realizar la interpretación de las normas y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión.

La o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta, según corresponda, tendrá en el desarrollo de las sesiones o reuniones como medios para promover la libre discusión y decisión parlamentaria, entre las y los Diputados, así como inhibir la interrupción de éstas, las siguientes acciones:

I. ... III.

IV. Dictar las medidas que estime pertinentes con base a la ley y el presente reglamento para procurar el objeto señalado en este numeral;

V. [...];

VI. Para atender una situación no prevista en el Reglamento, el La o el Presidente podrá dictar una resolución de carácter general, siempre que haya la opinión favorable de la Mesa Directiva y de la Junta. En caso contrario, este tipo de resoluciones sólo tendrán efecto con la aprobación de la mayoría simple del Pleno.

VII. A la Comisión de Normatividad Legislativa Estudios y Prácticas Parlamentarias le compete resolver en caso de duda, las consultas referentes a este reglamento, de acuerdo con la ley."

En este orden de ideas, derivado de los acontecimientos anteriormente descritos, el dictamen que se discutió en sesión del 26 de mayo de 2022 en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México carece de validez puesto que su promulgación violentó el debido proceso legislativo. De igual manera, como se evidenció, durante dicha sesión parlamentaria se trasgredieron los principios de imparcialidad y objetividad por parte de la Mesa Directiva y la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México pues de manera arbitraria se inaplicaron múltiples disposiciones del Reglamento con el propósito de aprobar dicho dictamen.

SEGUNDO. VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. El principio de legalidad es uno de los pilares del ordenamiento jurídico mexicano; éste se encuentra contenido en parte en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al efecto establece:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, **sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.** En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

(...)"

Por otra parte, los parámetros de la fundamentación y la motivación han sido desarrollados jurisprudencialmente en la siguiente tesis de la Segunda Sala durante la Séptima Época:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente **fundado y motivado**, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Séptima Época. Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Amparo en revisión 3713/69. Elías Chahín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos.”

Todo acto de autoridad debe tener fundamentación y motivación, y en el caso de las reformas a legislación local, el documento que las expresa es el dictamen de la comisión dictaminadora. En el caso que nos ocupa, en vez de hacer un razonamiento técnico, con base en los principios constitucionales y legales en materia electoral aplicables, se avocan únicamente a manifestar que se trata aplicar medidas de austeridad para “ordenar y poner límites al gasto público, contribuyendo a priorizar mejor el gasto y liberar recursos públicos”, sin ir más allá, ni justiciar si se trata de una medida proporcional y acorde a los principios

constitucionales rectores del buen gasto público y de la función electoral.

TERCERO. VIOLACIONES A LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL.

Las modificaciones a la estructura interna que se realiza mediante las normas que por esta vía se controvierte, vulneran gravemente los principios que rigen la función electoral, como son los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, al impactar éstos en el correcto funcionamiento de dichos organismos especializados del Estado y por ende ponen en riesgo la operatividad y funcionamiento del Instituto Electoral local.

Se dice lo anterior, pues como se podrá observar, el Decreto que por esta vía se controvierte realiza una profunda modificación a la estructura interna, así como a una distribución de competencias, que no fue consultada con expertos en la materia ni, mucho menos, con las distintas áreas del Instituto Electoral local; tampoco fue una reforma consensuada ni analizada por las propias áreas técnicas de la legislatura local, por lo que claramente realizan importantes modificaciones sin que, siquiera, se hubiera analizado la viabilidad y operatividad de las mismas y, tampoco, se analizaron las implicaciones administrativas y técnicas, a fin de analizar las problemáticas funcionales de estas modificaciones.

Como se mencionó, el proceso legislativo del que emanó el Decreto que se impugna no pasó por las etapas legislativas ordinarias, que resultan necesarias para realizar los estudios, consensos, cálculos e investigaciones necesarios y suficientes para que, previo a su aprobación, se analizara la operatividad, pertinencia y, sobre todo, su constitucionalidad de los cambios estructurales y financieros mediante él se realizan.

Es decir, la importante modificación interna, administrativa y técnica que se realiza mediante el Decreto que se controvierte, no fue precedida por un examen técnico integral ni presupuestario, que certificara que aun con estas modificaciones internas y administrativas se garantiza el cumplimiento de las atribuciones del Instituto Electoral local, sobre todo, frente al Proceso Electoral Local venidero.

Sobre todo, cuando de su contenido se evidencia la vulneración a los principios constitucionales que deben observar todas las autoridades electorales en relación con su función.

En efecto, en primer lugar, resulta evidente la inconstitucionalidad de todo el Decreto impugnado, al pretender anteponer principios de actuación de la autoridad administrativa electoral, dispuestos a nivel legal, a los contemplados a nivel constitucional.

En efecto, los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el artículo 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se encuentran dispuestos los principios rectores de la función electoral. Al ser fundamentales, se encuentran reforzados, al estar contenidos en los textos normativos máximos, que deben permear toda la actuación de las autoridades de todos los Poderes de la Unión. Estos se disponen de la siguiente manera.

Artículo 41.

...

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

...

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores

Artículo 116.

...

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;

Observamos, que los principios fundamentales que deben regir la función electoral son, en esencia, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

No obstante, como se puede apreciar del Decreto que se impugna, formal y materialmente se pretende supeditar estos principios a los principios definidos en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de

México, consistentes en el de racionalidad y austeridad.

Efectivamente, con base en estos supuestos principios, **se realiza toda una modificación a la estructura y a las funciones que cada Comisión en la que está dividido el Instituto Electoral, supeditando los principios constitucionales.**

En el ámbito formal, es manifiesta esta supeditación. Ello, al reducir drásticamente la estructura interna del Instituto, su personal y modificando sin consulta previa sus competencias y facultades, precisamente para supuestamente atender estos principios de racionalidad y austeridad.

En el ámbito material también es manifiesta esta supeditación. Se pretende que con estos cambios formales, se reduzca la plantilla del Instituto, sus funciones y, por ende, el gasto público que puede realizar.

Al respecto, debe considerarse que en la sentencia dictada el 15 de junio del año en curso por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se revocó la modificación y reducción al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 del Instituto, esencialmente al considerar que se redujo injustificadamente el presupuesto del Instituto, sin una deliberación suficiente, tal como aconteció con las modificaciones a la ley que por esta vía se tildan de inconstitucionales. Esto constituye un hecho notorio que no debe dejar de observar esta Suprema Corte de Justicia.

Es decir, debe estimarse que el Decreto es inconstitucional tan sólo por pretender imponerse a los principios constitucionales que rigen la función electoral y, a la postre, desarrollar una compleja modificación a la estructura y funciones de un Instituto Electoral de una entidad federativa, que no observó una labor deliberativa que, siquiera, considerara las afectaciones o implicaciones que ello conllevaba y que,

en la operatividad, revelan su incompatibilidad con todo el sistema normativo federal y local.

Ahora bien, a nivel práctico, también es clara la contravención de estos principios y las modificaciones que por estos se contemplan, como se analiza a continuación.

Los Organismos Públicos Electorales Locales doctrinariamente tienen reconocidas distintas características esenciales como las siguientes:

- La Inmediatez.- Son instituciones que se encuentran configuradas en forma directa desde la Constitución Federal y reforzadas en las Constituciones estatales y leyes generales, garantizando así su existencia, autonomía e independencia. Además, las constituciones estatales se encargan de instituir la función estatal de organizar las elecciones, de crear el órgano depositario de dicha función, determinando su integración, sus atribuciones principales, su organización básica, los principios que han de guiar su actuación, **los ámbitos de autonomía reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico** y las principales piezas del estatuto jurídico de sus personas titulares.
- El Estatus.- Se encuentran ubicados en el vértice del sistema constitucional de los estados, a la par de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial del Estado y de los demás órganos constitucionales autónomos, con quienes mantienen relaciones de coordinación y de no subordinación.
- El Objeto.- Se les encomienda el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en el ámbito de la entidad federativa, de lo que deriva que su actividad se considere de la más alta relevancia para la renovación periódica de los poderes públicos y, de manera más general, para la consolidación de la

democracia.

- La Autonomía.- Tienen reconocido y asegurado un amplio margen de autonomía que les permite interactuar en un espacio institucional propio, ajeno a injerencias, para que puedan cumplir con las atribuciones que constitucionalmente tienen encomendadas bajo el seguimiento de los principios que rigen la función electoral.
- La Independencia.- Se les asignan suficientes garantías para asegurar tanto la independencia objetiva del órgano en sus relaciones con los demás, como la independencia subjetiva de sus principales funcionarios, con el objeto de que mantengan la calidad técnica de su labor sin someterse a presiones o interferencias de ninguna especie.
- Los Criterios de actuación institucional.- Están obligados a desplegar todas sus actividades bajo criterios estrictamente técnicos y especializados. Son órganos profesionales que deben actuar en consonancia con los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, y bajo la observancia de cánones de funcionamiento y supervisión que impidan que sus decisiones se orienten por intereses ajenos, a fin de brindar confianza a la ciudadanía y fortalecer su legitimidad.
- La Transparencia y rendición de cuentas.- Representan instancias que, como cualquier poder público, tienen la obligación de informar periódicamente sobre el ejercicio de su labor, rendir cuentas de los recursos públicos que ejercen y poner al alcance de la ciudadanía la información pública que produzcan.
- La Concentración de su esquema de fuentes.- En su actuación están sometidos al respeto irrestricto a la Constitución Federal y a la legislación electoral, como consecuencia inmediata de su sometimiento a los principios de constitucionalidad y legalidad.

- El Control de sus actos.- Sus actos y resoluciones son sometidos a un control posterior para garantizar el cumplimiento de los principios de constitucionalidad y legalidad, para lo cual las Constituciones locales deben establecer un sistema de medios de impugnación en materia electoral.

En cuanto a su autonomía, la doctrina las ha dividido de acuerdo a la siguiente tipología:

- Técnica.- Como la capacidad de los organismos para decidir en los asuntos propios de la materia específica que les ha sido asignada, mediante procedimientos especializados, con personal calificado para atenderlos. Los órganos no están sometidos a las reglas de gestión administrativa y financiera que son aplicables a los servicios centralizados del Estado.
- Orgánica administrativa.- Que no dependen jerárquicamente de ningún otro poder u entidad. Se trata de independencia de acción entre órganos u organismos públicos, los que no están sujetos a subordinación. Establecen parámetros de organización interna.
- Financiera-presupuestaria.- Gozan de la facultad de definir y proponer sus propios presupuestos y, de disponer de los recursos que les sean asignados para el cumplimiento de sus fines. Ello garantiza su independencia económica. Es la capacidad para proyectar, gestionar y ejercer el presupuesto.
- Normativa.- Consiste en que se encuentran facultados para emitir sus reglamentos, políticas, lineamientos y en general, todo tipo de normas relacionadas con su organización y administración internas.
- De funcionamiento.- Es una combinación de los otros tipos de autonomía, **implica que los organismos cuenten con la capacidad para realizar, sin restricción o impedimento alguno,**

todas las actividades inherentes a sus atribuciones o facultades, lo cual involucra la autonomía técnica como a la orgánica, financiera-presupuestal y normativa.

- Plena.- Implica una autonomía total, es decir, una auténtica posibilidad de gobernarse sin subordinación externa.

Respecto a esta autonomía, esta Suprema Corte de Justicia ha destacado en la Jurisprudencia de rubro: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS.", que este tipo de órganos debe contar con las características siguientes:

- a) Estar establecidos y configurados directamente en la Constitución Federal;
- b) Mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación;
- c) Contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y
- d) Atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Ahora bien, en el caso, el artículo 46, apartado A, de la Constitución Local, se dispone que los organismos autónomos son aquellos entes de carácter especializado e imparcial; con personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes.

Entre estos organismos, se encuentra por supuesto el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de conformidad con la propia Constitución local.

Ahora, el artículo 50 de la Constitución Local dispone que la

organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de la Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso Local y alcaldías de la Ciudad de México, así como, de los procesos de participación ciudadana, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que corresponden al Instituto Electoral, **quien tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.**

En el ejercicio de dicha función, el Instituto Electoral se guiará por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

En congruencia con lo anterior, previo a la reforma inconstitucional que se pretende con el Decreto impugnado, el artículo 36 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponía que el Instituto Electoral gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, debiendo cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

No obstante, hoy se pretende una indebida modificación, que atenta todos estos principios de la función electoral, por una supuesta inserción de “otros principios de observación obligatoria”, mediante los cuales se propone una inconstitucional afectación estructural y funcional al Instituto Electoral local.

Principalmente, los principios de autonomía en el funcionamiento e independencia para tomar sus determinaciones, lo que implica una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con

imparcialidad y en estricto apego a la Constitución y la ley, sin interferencia o subordinación a algún otro Poder del Estado o cualquier otra persona.

Como se mencionó, son principios fundamentales en la función electoral los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, a los cuales debemos agregar los de profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Estos, se estatuyen como fines y límites, no sólo para el propio Instituto, sino también para otras autoridades del Estado, entre las cuales se encuentran lógicamente la autoridad legislativa.

En el mismo sentido se ha pronunciado esta Suprema Corte de Justicia, en múltiples sentencias y jurisprudencias, que se estima ocioso insertar en el presente escrito; criterios que además, por el profesionalismo de esta juzgadora, los conoce perfectamente.

No obstante, se considera importante señalar a esta autoridad jurisdiccional, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recientemente determinó, en la sentencia identificada con la clave de expediente SUP-JE-21/2019, que para el ejercicio de la función electoral, **las autoridades estatales que tienen a su cargo la organización de las elecciones gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.**

Estableció, que los Congresos de las entidades federativas, al aprobar el Presupuesto de Egresos en sus ejercicios anuales, deben autorizar los recursos públicos necesarios que corresponde entregar a los OPLES, pues con ello se da plena efectividad al ejercicio de sus funciones, de la función electoral.

Para cumplir con lo anterior, la Sala Superior consideró que en cuanto a

estos Institutos Electorales locales debe:

- Garantizarse su autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones.
- Reconocérseles como organismos autónomos con personalidad jurídica, patrimonio propio y profesionalidad en su desempeño.
- Respetar su autonomía e independencia funcional y financiera.
- Estimar su presupuesto como trascendente para el ejercicio pleno de las funciones constitucionales y legales que tienen encomendados.
- Estimar que las restricciones a su presupuesto trascienden al ámbito de su funcionamiento y operación.

A partir de todo lo anterior, es claro que el Decreto contenido, prácticamente en su integralidad, vulnera esta autonomía e independencia funcional y, por consecuencia, todos los demás principios que rigen su función.

En efecto, las distintas modificaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, por las cuales **sin un análisis presupuestal, técnico o administrativo, y sin que existan los recursos o procedimientos internos para implementarlo**, se eliminan distintas Unidades Técnicas Especializadas, fundamentales para la ejecución de las funciones que a su cargo tiene el Instituto Electoral local, con lo cual se vulneran los principios de la función electoral a que se encuentra obligado el Instituto.

Como lo podrá advertir este juzgadora, el Decreto que se impugna parte de una modificación a la estructura interna del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como una supuesta redistribución de funciones, sin que exista la mínima justificación para ello, y sin realizar un análisis técnico ni presupuestal, que **genere la mínima certeza respecto a su**

operatividad.

No debe soslayarse, que uno de los pilares democráticos esenciales, es precisamente el principio de certeza en las instituciones y en los procesos electorales.

La organización interna, así como las competencias y facultades de una autoridad electoral local, son de la mayor importancia constitucional para el sistema jurídico mexicano. Por ello, para realizar una modificación tan importante como la que se deriva del Decreto impugnado, **resultaba esencial la aplicación de un estándar constitucional importante, que motive no sólo la necesidad de la modificación, sino su factibilidad y operatividad en el mundo real y jurídico.**

No hacerlo de esta manera, sin duda afectaría la autonomía, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad y profesionalismo, con que debe realizar sus funciones el Instituto Electoral local.

Sin embargo, con el Decreto principalmente se afecta los principios de autonomía e independencia del Instituto, pues la modificación normativa excede gravemente sus alcances.

Se dice lo anterior, puesto que no sólo se **eliminan de golpe varias Comisiones Permanentes con que contaba el Consejo General del Instituto e intempestivamente se reconfiguran otras**, sino que sin tomar en consideración cualquier parámetro cierto, ni mucho menos al personal técnico especializado con que actualmente cuenta cada una de estas Comisiones, mucho menos aquel que será despedido por la reestructuración planteada, **ordena la combinación de funciones**, dejando sin un marco mínimo de decisión del Instituto para determinar la forma en que tendrá que trabajar de ahora en adelante.

Esto claramente vulnera no sólo la autonomía financiera, presupuestal y administrativa que permite definir sus necesidades presupuestales para administrar y emplear sus recursos tanto humanos, como materiales y económicos, sino también **el profesionalismo y eficacia con que el Instituto debe desempeñar sus funciones**. Ello sin mencionar la **violación a los derechos de aún un indeterminado número de personas funcionarias electorales**, en pleno uso de sus derechos político-electorales, **que necesariamente se verán afectados de manera injustificada**.

Esto pues, si bien la propuesta de modificación normativa atiende a un supuesto fin de ahorro y austeridad, lo cierto es que tanto el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, como la Sala Superior del Tribunal Electoral, han determinado que las medidas de racionalidad y disciplina del gasto corresponden de forma exclusiva a los Institutos Electorales, precisamente en ejercicio de su autonomía presupuestal y de gestión.

Esta libertad de gestión se ve seriamente mermada, porque se limita al Instituto en la posibilidad de adecuar las Comisiones existentes, atendiendo a la viabilidad y conexidad en las funciones que una u otra Comisión pudieran desempeñar.

Igualmente, la autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los órganos que cuentan con esa calidad reconocida en la Constitución Federal ejerzan sus funciones con plena independencia, para el pleno cumplimiento de sus fines.

Ejemplo de lo anterior, es lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha determinado que para el INE como organismo autónomo, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como el 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues como ejecutor de gasto, debe administrar los recursos de sus presupuestos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, en el entendido que su ejercicio será evaluado por las instancias técnicas del orden federal o local. Este mismo criterio resulta aplicable al Instituto Electoral de la Ciudad de México, por ser un órgano electoral con esta autonomía.

Esto es, que el Instituto Electoral local, al ser un organismo constitucional, autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento, con autonomía técnica y de gestión, así como la capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, no puede verse seriamente mermado por las disposiciones que se controvierten, mucho menos en el grado que estas intervienen en su ámbito de decisión y de organización interna y, mucho menos, cuando injustificadamente eliminan y administran varias áreas técnicas, esenciales para su funcionamiento.

Por el contrario, si lo que se pretende con las modificaciones normativas es el ejercicio responsable y mínimo del gasto público para la realización de las funciones que a su cargo tiene encomendadas el Instituto, es el propio Instituto el que debe hacer las adecuaciones administrativas y presupuestales que estime necesarias, con base en esa autonomía técnica y de gestión que tiene a su cargo, con base en los principios determinados en la Constitución.

Sin embargo, mediante la inclusión de supuestos principios de austeridad y racionalidad en el gasto, se pretende mermar gravemente la estructura interna y el funcionamiento del Instituto Electoral local, siendo que esos principios no pueden imponerse a los otros principios que sí se encuentran contenidos a nivel constitucional, como son los de

autonomía, independencia, eficacia y profesionalismo.

Si estos últimos se ven mermados por la inclusión a nivel legal de los primeros, y derivado de ello se realiza un completo rediseño de la estructura interna del órgano electoral y de sus facultades, resulta manifiesta la inconstitucionalidad de todas las normas derivadas de este **supuesto principio de austeridad**.

Atento a lo anterior, se advierte que la Constitución local prevé específicamente que los órganos constitucionales autónomos deben ser especializados y profesionales en el desempeño de sus actuaciones, ello para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confiere la normativa, esto es, se requiere de funcionarios altamente capacitados.

Esta autonomía funcional, dispone que los órganos constitucionales autónomos poseen funciones específicas con el fin de obtener mayor especialización, eficacia, control y transparencia en la realización de sus funciones. A partir de ello, cuentan con competencias propias y con la independencia funcional para llevarlas a cabo.

Sin embargo, de la integralidad del Decreto controvertido y las modificaciones normativas que realiza, se evidencia que se merman estas competencias, al acotar de manera importante la forma en que se organizará al interior el Instituto Electoral local, derivado de esta “desaparición” de Comisiones.

Una modificación tan trascendente a la estructura interna del Instituto como la que se contempla mediante este Decreto, impone claramente retos mayúsculos para redistribuir funciones sin afectar sus obligaciones. Esto podría efectuarse incluso mediante la autonomía técnica y reglamentaria que a su cargo tiene el Instituto; sin embargo, en el caso también se veda esta posibilidad.

Esto se aprecia de la lectura del Decreto impugnado, al redistribuir funciones técnicas, reservadas a un área técnica del Instituto que existía precisamente para llevarlas a cabo, en otras áreas no relacionadas. Todo ello, se reitera, sin el mínimo análisis legislativo.

A partir de todo lo anterior, las modificaciones normativas que se impugnan contravienen lo dispuesto en la Constitución federal y la Constitución de la Ciudad de México, pues inserta supuestos principios fundamentales de actuación para el Instituto Electoral local que, por un lado, no se encuentran contenidos en el texto constitucional y, por otro, contravienen los que sí se encuentran dispuestos constitucionalmente.

CUARTO. VIOLACIONES A LA FUNCIÓN ELECTORAL, POR LIMITACIÓN A LA COMPETENCIA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. La reforma ahora impugnada fusiona la Unidad Técnica de Fiscalización (UTEF) con la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. al respecto, si bien la facultad de fiscalizar a partidos políticos es una facultad atribuida al Instituto Nacional Electoral que puede delegar al instituto local, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México le otorga al Instituto Electoral de la Ciudad de México, en su artículo 36, fracción f), la facultad de fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos erogados por las agrupaciones políticas locales y las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local.

El objetivo de contar con Unidades Técnicas, consiste en dotarlas de autonomía técnica y de gestión, libres de injerencias de servidores públicos del mismo instituto, partidos políticos o grupos parlamentarios.

Conforme a los artículos 107 y 108, la UTEF es la unidad encargada de supervisar que los recursos de financiamiento público y privado que

ejerzan las asociaciones políticas, candidatos sin partido, organizaciones de observación electoral, y aquellas que el Instituto Nacional Electoral le delegue, se apliquen conforme a la ley.

Asimismo, conforme al artículo 109 fracción VI, corresponde a la UTEF elaborar y proponer los proyectos de normatividad respecto del registro de ingresos y egresos de sujetos obligados, la documentación comprobatoria sobre el manejo de recursos, de los informes que deben presentar ante el Instituto Nacional Electoral, las reglas para su revisión y dictamen, así como el procedimiento relativo a la liquidación de su patrimonio. También tiene entre sus facultades la de elaborar los dictámenes de cierre de liquidación respecto del proceso de liquidación de bienes de las asociaciones políticas que pierdan su registro, así como de las asociaciones civiles constituidas por aspirantes y candidatos independientes.

En este sentido, la propuesta adoptada en el decreto ahora impugnado resulta inconstitucional puesto que derivado de un análisis limitado de las funciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, elimina un área técnica sustancial para la correcta fiscalización no sólo de partidos políticos, sino de otros actores que participan en los procesos democráticos.

Al respecto, para desarrollar adecuadamente las funciones de fiscalización, se requieren de perfiles técnicos en materia jurídica y contable, además de con independencia, a efecto de garantizar que las decisiones sobre los aspectos financieros y operativos sobre los recursos públicos sean adecuadamente administrados y en su caso devueltos. Sin dicho personal, existe un riesgo fundado de que por falta de pericia o por injerencias externas los recursos otorgados a partidos y asociaciones sean usados indebidamente, poniendo en riesgo la imparcialidad de los procesos democráticos.

En este sentido, la reforma impugnada resulta inconstitucional al afectar gravemente e impedir la adecuada función del órgano electoral, y en consecuencia vulnera los derechos político electorales de la ciudadanía.

La austeridad, que es la motivación del legislador para eliminar la UTEF y reducir en consecuencia la autonomía del instituto local, no puede ni debe ser contraria a la función adecuada de los organismos autónomos como el Instituto Electoral Local y en consecuencia de los derechos políticos electorales.

Al respecto, la Constitución Federal en su artículo 134 define el concepto de gasto público, el cual debe realizarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Por el contrario, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que sirve como justificación del decreto ahora impugnado, en su artículo 91 define el concepto de gasto eficiente, como toda adquisición que tenga racionalidad económica, que sea necesario, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante y su costo monetarios sea inferior al beneficio que aporte.

De lo anterior se tiene que mientras la Constitución federal privilegia la satisfacción de los objetivos que deben cumplirse con el gasto público, la legislación local busca que el costo monetario sea menor. Lo anterior tiene un grave efecto en la forma en la que se determina implementar la política de austeridad en detrimento de la democracia y los derechos humanos.

En este sentido, conforme al mandato constitucional las autoridades

deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó, que se cuente con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas, ejercerse recta y prudentemente, buscando las mejores condiciones de contratación para el Estado.

Por lo tanto, es claro que la UTEF es una unidad imprescindible para garantizar la función fiscalizadora, ya sea propia o delegada, del instituto electoral local, por lo que lejos de buscar que el costo sea menor que el beneficio, como lo plantea la reforma impugnada, el legislador tiene la obligación de respetar la autonomía del órgano para determinar su integración así como garantizar los recursos suficientes y necesarios para llevar a cabo su función de forma adecuada y en consecuencia garantizar el goce y ejercicio de los derechos políticos electorales.

QUINTO. VIOLACIONES AL DERECHO DE NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO, EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Los artículos 1o. y 4o. constitucionales prevén la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho a la no discriminación.

Asimismo, los artículos 2 y 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece que los Estado Parte deben condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, por lo cual están obligados a adoptar medidas legislativas adecuadas que prohíban toda discriminación contra la mujer, además de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con dicha obligación. En este mismo sentido, la Convención referida prevé que los Estados deben garantizar el ejercicio y goce de los

derechos humanos, particularmente en la esfera política, económica, social y cultural, y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Por otro lado, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), establece en su artículo 7 que los Estados deben adoptar todas las medidas a través de medios apropiados y prevér acciones orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 15, establece que los gobiernos locales deberán crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de igualdad entre hombres y mujeres mediante las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres.

Respecto de la eliminación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y Derechos Humanos (UTGDH), se hace notar la gravedad de dicho acto, al ser regresivo en cuanto su funcionamiento se trataba de una medida adecuada para promover la igualdad de género en materia político-electoral, de conformidad con las obligaciones previstas en tratados internacionales.

El objetivo de la Unidad referida consiste en promover la igualdad y la paridad de género en el ejercicio de los derechos político-electorales en contextos libres de discriminación y violencia política, para promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos e igualdad de género en el ámbito político electoral.

La referida Unidad es un órgano técnico que requiere de personal capacitado con alto grado técnico en materia de derechos humanos y perspectiva de género, con el fin de obtener una mayor especialización,

agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales en materia de perspectiva de género y derechos humanos, por lo que con su eliminación no se tendría personal suficiente con el perfil técnico requerido.

Ahora bien, a pesar de que en papel las facultades se le transmiten a la Dirección Ejecutiva de Educación y Construcción de Ciudadanía, las reformas aprobadas no consideran que los perfiles del personal de dicha área no requiere el mismo grado de profesionalización.

La disposición impugnada, consistente en la eliminación de la Unidad referida resulta una medida regresiva para los derechos humanos, contraria a la obligación de las autoridades de garantizar la progresividad de los derechos humanos contenida en el artículo 1 constitucional. Se hace notar que el Instituto Electoral de la Ciudad de México a partir de 2016 contaba con una área encargada de elaborar políticas relacionadas con los derechos humanos y la igualdad de género. A partir de 2019, derivado de la necesidad de contar con personal técnico y especializado en la materia, se creó la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos.

Ahora bien, el principio de austeridad no puede ser pretexto para reducir los derechos humanos reconocidos por la Constitución como lo plantea el decreto ahora impugnado.

La austeridad no es un principio aplicable a la materia electoral, toda vez que en la fracción V, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece una serie de actividades mínimas para la función electoral:

"Artículo 41. (...)
(...)

(...)

I. a IV. (...)

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.

Apartado A. a B. (...)

Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

- 1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;*
- 2. Educación cívica;*
- 3. Preparación de la jornada electoral;*
- 4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;*
- 5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;*
- 6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;*
- 7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;*
- 8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;*
- 9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;*
- 10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y*
- 11. Las que determine la ley.*

(...)

(...)

Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.

VI. (...)"

De igual manera, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, reitera estos mínimos al establecer expresamente lo siguiente para los Organismos Públicos Locales:

“Artículo 4.

- 1. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de esta Ley.*
- 2. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales establecidas por la Constitución y esta Ley.”*

En este sentido, resulta claro que tanto la Constitución como la Ley General le dan prioridad a garantizar la adecuada función de los institutos electorales, que garantizan a su vez el goce y ejercicio de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos.

Toda la legislación citada como conjunto establece un mínimo inamovible que comprende la función electoral local de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1o., del inciso c) fracción IV, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establecer una austeridad, existiendo una eficiencia, y teniendo la misma la connotación de una reducción irracional del presupuesto, pone en peligro dicha función y resulta ser inconstitucional.

Como se desprende de lo anterior, es evidente que el Instituto Electoral de la Ciudad de México debe contar los recursos materiales, humanos y financieros para asegurar el cumplimiento de su mandato constitucional y legal, así como ejercer sus facultades en la materia, y para ello, para lo que dispondrán de lo necesario para asegurar el cumplimiento de la Ley, atendiendo a los principios del buen gasto público que señala la Constitución federal.

La inclusión de la austeridad en la función electoral local, contraviene lo que ha determinado en distintos momentos la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, al resolver el juicio electoral SUP-JE-83/2016, se resolvió lo siguiente:

“(...) el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz se constituye como un órgano autónomo que en el ejercicio de sus funciones es principio rector la independencia, la cual deberá ser garantizada por las Constituciones y leyes de los Estados.

(...) desde el ámbito nacional se mandató a los Poderes estatales de las entidades federativas garantizar las condiciones necesarias para que los Organismos Públicos Locales Electorales rijan su actuar con independencia, para lograr ese objetivo, es indispensable que a través del Presupuesto de Egresos se les dote de recursos públicos necesarios para la adecuada función que en la materia electoral tienen encomendados desde la cúspide Constitucional, como lo es, la organización de los procesos comiciales para la renovación de las autoridades correspondientes.

La independencia como principio rector de los organismos administrativos electorales de las entidades federativas, se desprende de las razones que motivaron en el dos mil catorce, al Constituyente Permanente de reformar los artículos 41 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se expone enseguida.

El Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Gobernación; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia Político Electoral dio origen al actual modelo de los órganos electorales administrativos tanto a nivel nacional como en el ámbito local.

*Del documento referido se deriva que desde el Poder Reformador se previó que con la intervención del Instituto Nacional Electoral se **reforzarían** los principios rectores de la función estatal en su actuar, a saber: imparcialidad,*

transparencia, independencia, integridad, eficiencia y efectividad, vocación de servicio y profesionalismo (...)

(...) la reforma constitucional en materia electoral de dos mil catorce, tuvo el propósito de fortalecer a las autoridades electorales locales, para garantizar su profesionalismo e imparcialidad, por lo que los dotó de condiciones que reforzaran su desempeño con base a la legalidad, certeza, equidad y transparencia.

(...) a efecto de dar efectividad a los principios en comento, los Congresos de las entidades federativas al aprobar el Presupuesto de Egresos en sus ejercicios anuales autorizan los recursos públicos que corresponde entregar a los Organismos Públicos Locales Electorales, los cuales precisan los montos y fechas en las cuales éstos se entregaran.

Cabe puntualizar que por mandato de los artículos 41 y 134 de la Constitución Federal, los Organismos Públicos Electorales Locales tienen el deber de administrar los recursos públicos que les son asignados en los respectivos presupuestos de egresos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos para los que están destinados, esto es, para cumplir con las funciones y fines que en materia electoral le son encomendados por la Ley Fundamental.

De ese modo, los organismos públicos electorales locales están en condiciones de cumplir sus funciones sustantivas, no solo presupuestal sino también en lo concerniente al funcionamiento e independencia en su actuar, a fin de que se garantice el cumplimiento de los principios rectores de la materia en la función estatal que por mandato constitucional tienen encomendada."

También ha determinado, en la tesis XV/2017, lo siguiente:

"ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. EL RESPETO A LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL GARANTIZA LA INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ).- De la interpretación de los artículos 41, Base V, Apartados A, y C, 116 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 154, 158, 159 del Código Financiero para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 111, fracción VIII, del Código Electoral de esa entidad federativa, se desprende que la autonomía de la gestión presupuestal de los organismos públicos locales electorales debe regir como principio fundamental para hacer efectiva la independencia de su función, de tal forma que la obtención de recursos se realice únicamente de conformidad con los mecanismos normativos establecidos, sin sujetarse a limitaciones de otros poderes al no existir disposición jurídica que permita al ejecutivo del Estado apartarse de la propuesta original del proyecto de presupuesto de egreso presentado por el organismo electoral. Lo anterior, en razón de que la Constitución Federal ordena a los poderes estatales garantizar las condiciones necesarias a fin de que los órganos públicos electorales estatales rijan su actuar con independencia, lo que se logra al dotarles, a través del presupuesto de egresos, de recursos públicos necesarios para su adecuada función."

Y al resolver el juicio electoral SUP-JE-108/2016, estableció:

"(...) la reducción al presupuesto del OPLE puede afectar su adecuado funcionamiento, como lo es, cumplir por lo menos con los servicios básicos en el desarrollo normal del proceso electoral 2016-2017, en que se elegirán doscientos doce munícipes en el Estado de Veracruz, y que implica, erogar salarios de las y los servidores públicos, prerrogativas de partidos políticos, recursos materiales, entre otras cosas, (...).

En ese sentido, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la autonomía de los organismos públicos locales, es un componente esencial para el funcionamiento y consolidación del sistema electoral mexicano, pues permite salvaguardar la independencia e imparcialidad en las decisiones de las autoridades electorales locales.

(...)

Con el argumento que, al ser presentado por el Gobernador un presupuesto menor, obstaculiza las actividades que le corresponde llevar a cabo a dicho Organismo Público Electoral Local y por ende trastocaría de manera grave su función asignada constitucionalmente.

De esta forma se le estaría afectando, además de tener una disminución de sus recursos materiales y personales, por lo tanto, no se tendrían los elementos mínimos requeridos para poder hacer frente al próximo proceso electoral a celebrarse en dicho Estado en que se renovarán doscientos doce Consejos Municipales.”

Ahora bien, en la Sentencia recaída en el juicio SUP-RAP/088/2020, que versó respecto de la eliminación de la Diputación Migrante por razones de presupuesto, se resolvió lo siguiente:

*“(…) En ese sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha razonado que las medidas de carácter deliberadamente regresivas requieren de una consideración más cuidadosa, debiendo justificarse plenamente y según el aprovechamiento pleno de los recursos que el Estado tenga a su alcance. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado la necesidad de otorgar una atención especial a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables, por lo cual **las medidas regresivas en materia de grupos vulnerables deben ser adoptadas en circunstancias extraordinarias y considerando todos los demás derechos.** En el caso, sin embargo, no se advierte una justificación adecuada que explique la supresión de la figura de diputación migrante. Sobre todo, y considerando que se trata de un derecho especial en función de un grupo, tampoco se desprende que la decisión se haya tomado a partir de una circunstancia extraordinaria que así lo justifique, o en atención a una imperante necesidad de interés público. **La justificación que proporcionó el órgano legislativo de la Ciudad de México para suprimir esta figura se basó, esencialmente, en la falta de recursos económicos para su implementación. Sin embargo, esta Sala Superior considera que el legislador se encontraba obligado a justificar de manera reforzada, así como a demostrar la imposibilidad de materializar la diputación migrante según el aprovechamiento pleno de los recursos a cargo de la Ciudad de México, de entre otros medios que pudieran ser considerados idóneos, y no meramente señalar que no contaban con los recursos necesarios para 156 poder implementar esa forma de regulación del derecho a ser votado por un grupo vulnerable...**”*

Por ello, consideramos que el principio de austeridad escapa de la materia, en tanto que lo que debe privilegiar -atendiendo, estrictamente lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, sin lugar a dudas- es asegurar la debida organización de las elecciones, y la garantía del ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Por lo tanto, consideramos que la reforma ahora impugnada es inconstitucional porque contraviene los artículos 41, 116 y 134 constitucionales, en materia de austeridad, con independencia de la violación a los artículos 1 y 4 constitucionales por lo que hace al derecho a la no discriminación e igualdad de género.

DERECHO

Son aplicables al caso las disposiciones 1o., 3o., 7o., 9o. Bis, 59, 60, 61, 64, 67, 69, y demás aplicables de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para proveer de convicción a esa Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo establecido por los artículos 31, 32 y 59, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañamos el material probatorio que consideramos, resulta idóneo para acreditar las manifestaciones vertidas. Al respecto, dichas medidas deberán de adoptarse de forma progresiva, conforme al artículo 8 de la referida Convención.

Pruebas que relacionamos con todas y cada una de las consideraciones planteadas en este ocurso:

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la certificación expedida por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral,

LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA, en la que se hace constar, que Movimiento Ciudadano cuenta con registro nacional de partido político, por lo que se encuentra en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que la Ley Suprema y las Leyes reglamentarias en Materia Electoral le señalan, misma que relacionamos con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente Acción de Inconstitucionalidad. Solicitando nos sea bien recibida.

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la certificación expedidas por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA, en la que se hace constar que los suscritos, nos encontramos registrados como Coordinador e integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, misma que relacionamos con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente Acción de Inconstitucionalidad. Solicitando nos sea bien recibida.

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la certificación expedida por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA, que acredita la vigencia de los Documentos Básicos de Movimiento Ciudadano; normativa en la que se hace constar que los suscritos, contamos con las facultades de representación de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, misma que relacionamos con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente Acción de Inconstitucionalidad. Solicitando nos sea bien recibida.

4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la impresión de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 864 Bis, Vigésima Primera Época, de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, del 2 de junio de 2022, donde se publicó el Decreto por el que se reforman los artículos 33; 36; el primer párrafo y la fracción IV del artículo 37; la fracción XI del

artículo 50; las fracciones I, IV y V así como el último párrafo del artículo 59; el primer párrafo del Art. 60; el artículo 61; la fracción IV del artículo 63; el artículo 64; la fracción IV del artículo 67; la fracción V del artículo 80; los incisos N) y Ñ) de la fracción II, así como la fracción XVII del artículo 83; primer y último párrafo del artículo 94; primer párrafo, las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 95; el artículo 103; el artículo 107; las fracciones I, II, IV, VII, VIII y IX del artículo 109; tercer párrafo del artículo 121; la fracción III del artículo 124; la fracción II del artículo 162; la fracción VI del Artículo 251; el artículo 265; la fracción V del artículo 273; el primer párrafo y la fracción V del artículo 323; el primer párrafo del artículo 348; el artículo 350; 351; primer párrafo, fracción I y último párrafo del artículo 352; primer y último párrafo del artículo 353; fracción III del artículo 383; el artículo 406; y primer párrafo del artículo 408. Se adiciona la fracción X Bis, un Párrafo y los incisos A), B), C), D), E) y F) al artículo 60; se adiciona el artículo 60 Bis, los incisos A), B), C), D), E), F), G), H), I) y J) a la fracción XII del artículo 63; la fracción IV Bis al artículo 67; los incisos O), P) y Q) a la fracción II del artículo 83; las fracciones XIX Bis, XIX Ter y XIX Quáter al artículo 86; las Fracciones XXIV Bis, XXIV Ter y XXIV Quáter al artículo 88; las fracciones XXII Bis, XXII Ter, XXII Quáter, XXII Quinquies y XXII Sexies al artículo 94; las fracciones XV Bis con los incisos A) y B), XV Ter, XV Quáter, XV Quinquies, XV Sexies, XV Septies, XV Octies y XV Nonies del artículo 95; se agregan los incisos A) y B) del artículo 103. Se deroga el inciso C) de la fracción XI del artículo 50; las fracciones VII y IX del artículo 59; se derogan las fracciones III y X del Artículo 60; el Artículo 65; el Artículo 68; el inciso N) de la Fracción II del artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción XVII del artículo 86; las fracciones III, V y VI, así como el último párrafo del artículo 98; la fracción II y dos párrafos del artículo 102, los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 107; el artículo 108; el artículo 109. todos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Prueba documental que relacionamos con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho

de la presente acción de inconstitucionalidad. Solicitando nos sea bien recibida.

5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca a los intereses de Movimiento Ciudadano y que se relacionan con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente Acción de Inconstitucionalidad.

Por lo expuesto y fundado a ustedes CC. Ministros y Ministras de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy atentamente solicitamos se sirvan:

PRIMERO. - Tener por presentada en el tiempo y la forma exigidos por la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Acción de Inconstitucionalidad, promovida por Movimiento Ciudadano.

SEGUNDO.- Tener por reconocida la personalidad y el carácter de quienes la suscribimos y por señalado el domicilio para recibir notificaciones y documentos, así como autorizados a los delegados que se mencionan.

TERCERO.- Cumplido el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria en cita, dictar Resolución, declarando la invalidez de la legislación impugnada, por resultar violatoria de los derechos, principios y valores consagrados y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano.


Protestamos a Ustedes lo necesario.

**Por México en Movimiento
Comisión Operativa Nacional**


Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro
Coordinador

Integrantes



Lic. Benjamín Alamillo González


Lic. Ana Lucía Baduy Valles


Lic. Rubén Isaac Barrios Ochoa



Lic. Jacobo David Cheja Alfaro


Dip. Priscilla Franco Barba


**Mtra. Martha Patricia Herrera
González**


Dip. Tabita Ortiz Hernández


Mtra. L. Alejandra Puente García


Mtro. Juan I. Zavala Gutiérrez
Secretario General de Acuerdos

011618

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

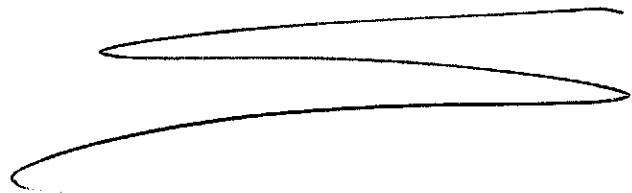
2022 JUL 4 AM 8 26

ORIGINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

61

Recibido por buzón Judicial -
Con fecha Jul 1-2022 - en
61 folios con:

- Dos Certificaciones de Registro
en 1 folia cada una
- Copia Certificada de "Movimiento
Ciudadano Declaración de Principios -
en 214 "folios" según su certificación.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Acción de
Inconstitucionalidad
en materia electoral

NOMBRE DEL PROMOVENTE: Movimiento
Ciudadano

NÚMERO DE COPIAS: uno

NÚMERO DE ANEXOS: cero

FOLIO: 27542

367cc2c902d5649585bddbb3385d79551602716528e4a2a174d5cec73fe278

367cc2c902d5649585bddbb3385d79551602716528e4a2a174d5cec73fe278

367cc2c902d5649585bddbb3385d79551602716528e4a2a174d5cec73fe278

367cc2c902d5649585bddbb3385d79551602716528e4a2a174d5cec73fe278